



REPÚBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**10ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA**

**28 DE OCTUBRE DE 2015**

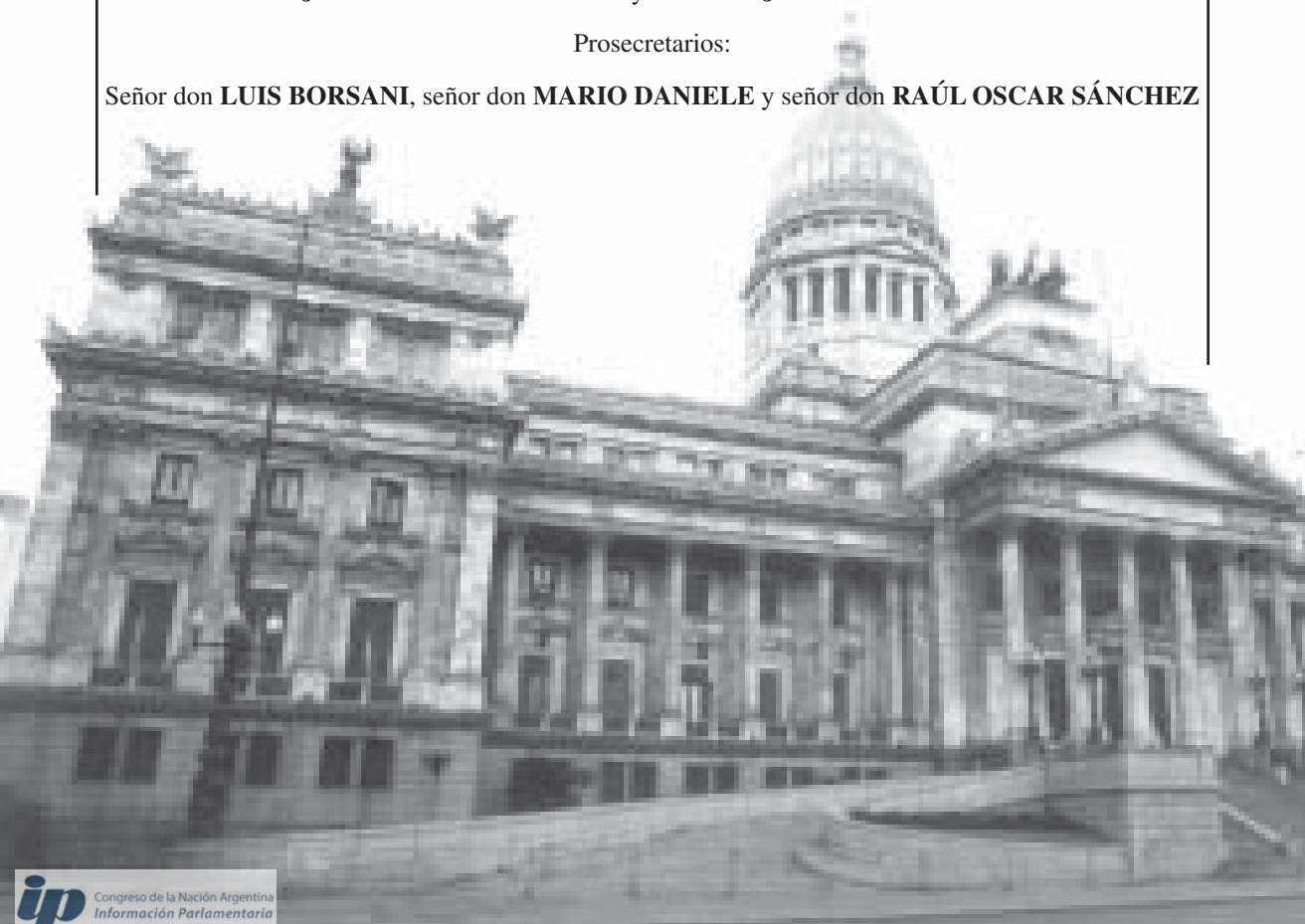
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don **AMADO BOUDOU**,  
y del señor presidente provisional del Honorable Senado, senador don **GERARDO ZAMORA**

Secretarios:

Señor don **JUAN HÉCTOR ESTRADA** y señor don **JUAN HORACIO ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor don **LUIS BORSANI**, señor don **MARIO DANIELE** y señor don **RAÚL OSCAR SÁNCHEZ**



## PRESENTES:

ABAL MEDINA, Juan Manuel  
 AGUILAR, Eduardo Alberto  
 AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
 ARTAZA, Eugenio Justiniano  
 BARRIONUEVO, Walter Basilio  
 BERMEJO, Rolando Adolfo  
 BERTONE, Rosana  
 BLAS, Inés Imelda  
 BORELLO, Marta Teresita  
 BOYADJIAN, Miriam Ruth  
 CABRAL ARRECHEA, Salvador  
 CASTILLO, Oscar Aníbal  
 CATALÁN MAGNI, Julio César  
 CIMADEVILLA, Mario Jorge  
 CREXELL, Lucila  
 DE ANGELI, Alfredo  
 DE LA ROSA, María Graciela  
 DI PERNA, Graciela Agustina  
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz  
 FELLNER, Liliana Beatriz  
 FIORE VÍNUALES, María Cristina del Valle  
 FUENTES, Marcelo Jorge  
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela  
 GIMÉNEZ, Sandra Daniela  
 GIUSTINIANI, Rubén Héctor  
 GODOY, Ruperto Eduardo  
 GONZÁLEZ, Pablo Gerardo  
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel  
 GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio  
 HIGONET, María de los Ángeles  
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel  
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle  
 JUEZ, Luis Alfredo  
 KUNATH, Sigrid Elisabeth  
 LABADO, María Esther  
 LATORRE, Roxana Itatí

LEGUIZAMÓN, María Laura  
 LINARES, Jaime  
 LUNA, Mirtha María Teresita  
 MANSILLA, Sergio Francisco  
 MARINO, Juan Carlos  
 MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo  
 MAYANS, José Miguel Ángel  
 MICHETTI, Marta Gabriela  
 MONLLAU, Blanca María del Valle  
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor  
 MONTERO, Laura Gisela  
 MORALES, Gerardo Rubén  
 MORANDINI, Norma Elena  
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita  
 ODARDA, María Magdalena  
 PEREYRA, Guillermo Juan  
 PÉRSICO, Daniel Raúl  
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos  
 PICHETTO, Miguel Ángel  
 PILATTI VERGARA, María Inés  
 REUTEMANN, Carlos Alberto  
 RIOFRÍO, Marina Raquel  
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz Liliana  
 ROLDÁN, José María  
 ROMERO, Juan Carlos  
 ROZAS, Ángel  
 SANTILLI, Diego  
 SANZ, Ernesto Ricardo  
 SOLANAS, Fernando Ezequiel  
 URTUBEY, Rodolfo  
 VERNA, Carlos Alberto  
 ZAMORA, Gerardo

## AUSENTES, CON AVISO:

BASUALDO, Roberto Gustavo  
 MEABE, Josefina Angélica  
 MENEM, Carlos Saúl

## SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 3)
2. **Homenaje al ex presidente Néstor Kirchner.** (S.-3.294/15; S.-3.511/15 y S.-3.650/15.) (Pág. 4)
3. **Manifestaciones.** (Pág. 5)
4. **Homenaje al ex presidente Néstor Kirchner.** (S.-3.294/15, S.-3.511/15 y S.-3.650/15.) (Continuación.) (Pág. 6)
5. **Plan de labor.** (Pág. 6)
6. **Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2016.** (O.D. N° 766/15.) **Prorrogação del impuesto sobre créditos y débitos.** (O.D. N° 767/15.) **Ley de emergencia pública.** (O.D. N° 768/15.) (Pág. 6)
7. **Manifestaciones.** (Pág. 6)
8. **Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2016.** (O.D. N° 766/15.) **Prorrogação del impuesto sobre créditos y débitos.** (O.D. N° 767/15.) **Ley de emergencia pública.** (O.D. N° 768/15.) (Continuación.) (Pág. 6)
9. **Creación del Ente Nacional del Desarrollo para el Deporte.** (O.D. N° 769/15.) **Modificación de la Ley del Deporte.** (O.D. N° 770/15.) (Pág. 64)
10. **Marco legal para la actividad actuarial.** (C.D.-66/15 y fe de erratas C.D.-72/15.) (Pág. 73)
11. **Responsabilidad del Estado en la educación superior.** (O.D. N° 703/15.) (Pág. 74)
12. **Regulación de honorarios de abogados.** (O.D. N° 753/15.) (Pág. 76)
13. **Día de la Integración Latinoamericana.** (O.D. N° 750/15.) (Pág. 80)

14. **Presupuestos mínimos de protección ambiental de la calidad acústica.** (S.-321/15.) (Pág. 81)

15. **Ampliación de plazo para presentación de beneficio extraordinario para las víctimas del atentado a la Embajada de Israel.** (O.D. Nº 555/15.) (Pág. 81)

16. **Tratamiento en conjunto de proyectos de ley.** (Pág. 81)

Presupuestos mínimos de protección ambiental de la calidad acústica. (S.-321/15.)

Declaración de interés nacional del consumo de frutas y hortalizas frescas. (S.-3.509/15.)

Obligatoriedad en todo el territorio nacional de la realización y seguimiento de niños y niñas menores de seis años de la prueba nacional de pesquisa de trastornos del desarrollo (Prunape) u otras pruebas de pesquisa construidas en el país. (S.-713/15.)

Imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la integridad sexual. (S.-2.288/14.)

17. **Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.** (Pág. 83)

Declaración de interés del I Coloquio Provincial sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. (S.-3.582/15 y S.-3.633/15, fe de erratas.)

Interés en el libro *Ramón Cuánto. Aquí canta lo que nunca cantó.* (S.-3.583/15.)

Beneplácito por el logro obtenido durante el encuentro Saberes en Red @SDE. (S.-3.680/15.)

Beneplácito por la inauguración del primer parque ecológico en el departamento de Ojo de Agua. (S.-3.679/15.)

Beneplácito por la realización de la Jornada Manzana Sana. (S.-3.603/15.)

Interés en el trabajo que realiza la academia de danzas Latin Dream. (S.-3.626/15.)

Interés en la procesión en honor a la Difunta Correa. (S.-3.684/15.)

Beneplácito por el llamado a licitación para la construcción del Acueducto del Desarrollo Formoseño. (S.-3.635/15.)

Beneplácito por la suspensión del remate de la chacra ubicada en ex bodega Chacra Nº 83 de la jurisdicción de Allen. (S.-3.373/15.)

Pesar por la desaparición de Elvira Soledad Olivera. (S.-3.077/15.)

Declara de interés el III Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial. (S.-3.625/15.)

Declara de interés la VII Marcha Globos Blancos. (S.-3.599/15.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la Policía Federal Argentina. (S.-3.569/15.)

Declara de interés el XXIX Festival del Niño Montielero. (S.-3.285/15.)

Beneplácito por el 125º aniversario de la fundación de la ciudad de Urdinarraín, provincia de Entre Ríos. (S.-3.274/15.)

Declara de interés la realización de la XXXVII Reunión Académica y VIII Asamblea General Ordinaria de la ASIBEI en la ciudad de Ushuaia, provincia del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-3.526/15.)

18. **Manifestaciones.** (Pág. 84)

19. **Apéndice.**

I. **Plan de labor.** (Pág. 85)

II. **Asuntos entrados.** (Pág. 86)

III. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 259)

IV. **Actas de votación.** (Pág. 436)

V. **Inserciones.** (Pág. 449)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 31 del miércoles 28 de octubre de 2015:

**Sr. Presidente.** — La sesión está abierta.

1

**IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL**

**Sr. Presidente.** — Invito al señor senador por Santa Cruz Pablo González a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

Se va a votar el artículo 2º.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). — Resultan 40 votos afirmativos, 12 negativos.

—El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** — Con la media sanción se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo.<sup>2</sup>

## 12

### REGULACIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADOS (O.D. N° 753/15)

**Sr. Presidente.** — Vamos a tratar ahora el Orden del Día 753, relativo a los honorarios de los abogados.

Senador Urtubey.

**Sr. Urtubey.** — Señor presidente: este proyecto es de nuestra autoría más la de los senadores Pichetto, Fuentes y Guastavino, y reconoce una construcción colectiva de la que participaron prácticamente todos los colegios de abogados del país, coordinados también por una actuación del Ministerio de Justicia que receptó esa vieja aspiración que tienen los abogados organizados de todo el país en relación con superar una vetusta ley de regulación de honorarios, que es la 21.839.

Quiero también reconocer que esta ley ha tenido un intenso trabajo en comisiones, y el aporte, el trabajo de todos los espacios políticos, de la senadora Negre de Alonso, del senador Cimadevilla y del senador Petcoff Naidenoff también. Hemos escuchado juntos —lo que ha motivado un montón de modificaciones— los aportes de muchísimos profesionales, expertos y titulares de colegios públicos. También se dio un debate inesperado que motivó una seria modificación, que plantearé en el debate, con relación a las incumbencias de los contadores públicos.

Voy a empezar por el final. El artículo 64 es el último de este proyecto, pero para aventar todo tipo de dudas voy a empezar por el final.

El artículo 64, en su redacción original —el cual llegó a tener un dictamen en mayoría—,

establecía que la sindicatura, en los casos de concursos y quiebras, podía ser ejercida tanto por un contador como por un abogado. Esto generó una controversia muy importante, y la verdad es que nos motivó a todos los miembros de la comisión no solamente a iniciar diálogos con las entidades, los colegios profesionales, sino también a rever esta posibilidad y generar un consenso, manteniendo la incumbencia original que tenían los contadores sobre este tema con una fórmula que creo que es interesante y muy buena: incumbencia exclusiva de los contadores con patrocinio letrado obligatorio de los abogados.

Les recuerdo que en la actual redacción de la ley de quiebras el patrocinio letrado era una posibilidad del síndico, pero no una obligación. Podía darse la situación de un síndico que entendiera —no había muchos, debo reconocerlo— que no hacía falta una asistencia profesional, y prescindiera del abogado. Hoy, en vez de modificar los artículos —tal como proponíamos— de la ley de quiebras, lo que hacemos es en dos artículos de la ley de quiebras, el 254 y el 257, establecer, en el 254, que todas las funciones del síndico deben ser ejercidas con patrocinio letrado obligatorio. Y en el 257, en cuanto al asesoramiento profesional, disponer que sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio, el síndico podrá requerir el asesoramiento de otros expertos cuando la materia exceda a su competencia.

Es decir que creo que hemos salvado esa controversia que se generó respecto de las incumbencias de la manera más razonable posible.

Dicho esto, que creo que es la modificación más importante, voy a proponer otras modificaciones que también han sido producto de conversaciones que han seguido hasta hace poco...

**Sr. Morales.** — ¿Cómo quedaría el texto del artículo 64?

**Sr. Urtubey.** — El texto del artículo 64 queda exactamente así: “Sustitúyense los artículos 254 y 257 de la ley 24.522 de concursos y quiebras que quedarán redactados de la siguiente forma”.

Entonces, empiezo a poner los artículos de la ley de quiebras. Artículo 254: Funciones. El síndico tiene las funciones indicadas por esta ley en el trámite del concurso preventivo, hasta su finalización y en todo el proceso de quiebra, incluso su liquidación. Ejercerá las mismas con patrocinio letrado obligatorio, cuyos honorarios

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.

serán abonados por el concurso o la quiebra, según corresponda.

Aclaro —es un tema de especialistas— que cuando el síndico contrataba a un abogado, los honorarios del abogado estaban a cargo del síndico. Ahora, como se los impone de alguna manera —la ley es obligatoria—, nos pareció justo cargarlos al pasivo y no al bolsillo del síndico.

En cuanto al artículo 257, que preveía el asesoramiento profesional, en general, no podíamos restringirlo al abogado. Entonces pusimos: sin perjuicio del patrocinio letrado obligatorio, el síndico podrá requerir asesoramiento de expertos cuando la materia exceda su competencia. En tal caso, no el del abogado, los honorarios de los asesores que contrate serán a su exclusivo cargo, como decía el artículo 257.

**Sr. Morales.** — Entonces, no se toca el artículo 253.

**Sr. Urtubey.** — No se toca el artículo 253.

Dicho esto, quiero señalar brevemente los grandes principios de la ley.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador don Gerardo Zamora.

**Sr. Urtubey.** — En realidad, el más importante es la condición de orden público. La vieja ley 21.839 no tenía la condición de orden público; por lo tanto, era absolutamente disponible por las partes abogados o sus clientes, y esto creo que le ha dado un carácter absolutamente distintivo a esta ley. El honorario hoy tiene carácter alimentario, es inembargable por encima del 20 por ciento y constituye un privilegio general en caso de crédito de concursos. Éste es un cambio fundamental de principios.

El otro es el viejo tema de los abogados, que tienen una retribución que la fija un tercero, que es un juez, y lo que es más grave, que la paga otro, que es el que resultó vencido en el juicio. O sea que, realmente, es natural que pase que entre que el juez fija el honorario y el condenado, en costas, después de apelar todo lo que pueda, pague, transcurra un plazo temporal muy importante que, en épocas de inflación y devaluación de la moneda, hacía que el honorario del abogado siempre quedara absolutamente atrasado frente al costo de vida. Se lo trató de enmendar de manera negativa en todo aspecto: con la famosa indexación, que terminó destru-

yendo la moneda nacional, o con la aplicación de intereses de tasa activa, tratando de corregir lo que era incorregible.

Entonces, ¿qué se establece? Se establece lo que se llama Unidad de Medida Arancelaria. Es decir, se sustituye el peso como forma de medir el honorario por una unidad de medida arancelaria que equivale al 1,5 por ciento de la retribución que tiene un juez federal de primera instancia con seis años de antigüedad. Ésta es la unidad de medida que se establece en la propia ley. Es decir, montos de UMA —ésta es la denominación— para cada trámite. De tal manera que el abogado tiene una protección respecto de la libre “pactabilidad” de honorarios. Por ejemplo, en un divorcio, se establecen 10 UMA. El UMA, según lo que hemos podido constatar al día de la fecha, alrededor de mil y pico de pesos. Un divorcio, 10 UMA como mínimo de regulación.

Hay otro tipo de normas que quiero mencionar porque hemos pedido su modificación. Lo vamos a hacer en el recinto y voy a redactar cada artículo, o a efectos de que quede en la versión taquigráfica ya que no hubo tiempo de hacer la correlación de artículos.

Hay algunos artículos vinculados con los pactos de cuota litis que entendemos que, en algún lado, son excesivamente regulatorios e invaden el principio de autonomía de la voluntad. En ese sentido, hemos propuesto una modificación que se vincula con su eliminación.

Artículo 6°, inciso c). Hemos entendido que, como lo decía la vieja ley, los asuntos de tipo previsional y alimentarios no tenían que ser objeto de pacto de cuota litis para evitar cualquier tipo de abusos basados en una situación de necesidad. Nos parecía que no podían ser objeto de pacto. Proponemos que el inciso c) del artículo 6° diga: “En los asuntos previsionales, de alimentos y con intervención de menores de edad que actúen con representante legal, los honorarios de los profesionales pactados no podrán ser objeto de pactos”.

Y quiero aclarar por qué está bien hecha la sugerencia que me hacía el senador Naidenoff. Porque en el caso de los juicios laborales, esta protección está prevista en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que en los casos de juicios laborales no podrá haber pactos por encima del 20 por ciento. Esos pactos hay que denunciarlos, los pagos de honorarios



no se pueden hacer directamente al abogado sino que hay que presentarlos en el expediente y solamente se puede cobrar ese pacto con una ratificación posterior del trabajador respecto de que ese pacto existe. O sea que esa protección, para evitar pactos abusivos con relación a personas que están en inferioridad de condiciones, estaba prevista en la ley laboral y es muy acertada la opinión del senador Naidenoff en lo que hace a asuntos previsionales y de alimentos.

El otro punto está vinculado con el inciso f) y va en el otro sentido. Va en el sentido de respetar el principio de autonomía de la voluntad. El inciso f) decía que era nulo el contrato sobre honorarios profesionales que no fuera celebrado por abogados o procuradores inscriptos a tiempo de convenirlos en la matrícula respectiva. Esto me parece que es una intromisión indebida en ciertas prácticas profesionales que tienen estudios más importantes que contratan abogados y que pueden establecer un sistema de retribución en el que intervengan titulares del estudio jurídico y que no necesariamente sean abogados que participen en el pleito. Entonces, lo que proponemos respecto al artículo 6º, inciso f), es la lisa y llana eliminación.

En el artículo 9º, vamos en el mismo sentido de establecer una nulidad fulminante en caso de participación de honorarios entre abogados y una persona que pueda carecer de títulos, aunque sí sean titulares del asunto. Sí, lo pueden haber conseguido, procurado y contratado un abogado para poder llevar adelante el juicio. También nos pareció que esto es una intromisión excesiva en el principio de autonomía de la voluntad. En consecuencia, el artículo 9º quedaría eliminado in totum del dictamen a la vista.

Seguimos. En el artículo 17, establecemos una modificación que voy a explicar a continuación. El artículo 17 regulaba honorarios de abogados, procuradores y auxiliares de justicia en una misma igualdad. Y a nosotros nos pareció que no es lo mismo la protección del honorario del abogado o del procurador que la del auxiliar de la justicia, porque el auxiliar de la justicia puede encarecer mucho el proceso. Y una de las cosas para garantizar el acceso a la justicia es que los auxiliares de la justicia puedan tener una regulación menor. Es por ello que los sacamos de esa norma y los ponemos en el artículo 22. En ese artículo, establecimos que si de la apli-

cación de los porcentajes citados surgiera un honorario irrazonablemente desproporcionado, el juez podrá fijar un porcentaje menor teniendo en cuenta el informe presentado en su calidad técnica, así como la naturaleza y complejidad de las tareas.

**Sra. Negre de Alonso.** – ¿Me permite una aclaración?

**Sr. Urtubey.** – Sí.

**Sr. Presidente (Zamora).** – Para una aclaración, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.** – ¿Eso significa que quedan fuera del orden público los auxiliares? Queda únicamente el orden público para los abogados.

**Sr. Urtubey.** – Sí.

Me queda un cambio más respecto de los honorarios de los interventores, siempre pensando en no encarecer el proceso. Porque un proceso que se encarece es directamente proporcional a una falta de acceso a la justicia.

En caso de los interventores judiciales, se establecía un porcentaje del 10 al 20 por ciento sobre el bruto, que era una barbaridad. Siempre debiera ser sobre utilidades. Es decir, tanto el interventor judicial como el recaudador o el liquidador intervienen sobre utilidades líquidas y no sobre brutas.

Y el otro tema era el de los árbitros. El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos muy importante en el mundo, quizá mucho más en el mundo que en el orden interno. La cuestión era que tenía porcentajes muy altos que se apartaban notablemente de la práctica internacional. Entonces, hemos eliminado el piso, porque si puede haber un arbitraje sobre un tema importantísimo puede ser un monto del 1 por ciento, o de un 0,5 por ciento, y le hemos puesto el límite máximo del 15 por ciento, con lo cual nos parece que hemos restablecido la razonabilidad sobre esa cuestión.

Éstos son todos los puntos que propongo modificar en el recinto.

**Sr. Presidente (Zamora).** – Tiene la palabra el senador Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.** – Señor presidente: quiero expresar, en primer lugar, nuestro acompañamiento en general y en prácticamente todo

el articulado en particular, con excepción del artículo 11.

Como una cuestión previa, quiero destacar la predisposición de la Presidencia para aceptar los cambios sugeridos. Pero el artículo 11 nos parece un exceso. Por eso, nosotros no vamos a acompañarlo en particular. Allí se define en qué consisten los honorarios, como la retribución del trabajo profesional, pero en la parte pertinente que objetamos expresa: ningún asunto que haya demandado actividad profesional judicial, extrajudicial, administrativa o en trámite de mediación podrá considerarse concluido sin el previo pago de los honorarios y no se ordenarán levantamientos de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar, entrega de fondos o valores depositados, inscripciones o cualquier otra cuestión que fuera el objeto del pleito hasta tanto se hubieran cancelado los mismos o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado. Se deberá también dar cumplimiento a las normas previsionales de seguridad social para abogados, procuradores, etcétera.

Para que se entienda: nos parece que esto es sinceramente un privilegio excesivo. Creo que esto es un abuso de derecho. Un pleito culmina con una sentencia firme cuando termina la instancia de apelación. Y queda supeditado en este caso al previo pago de los honorarios profesionales. También, el pleito puede finalizar, pero el levantamiento de cualquier medida cautelar –embargo, inhibición o medida cautelar específica– tampoco se puede viabilizar hasta tanto no se efectivicen los honorarios profesionales. Y, de alguna manera, me parece que esto, inclusive, puede afectar el derecho de propiedad del cliente y tranquilamente ser atacado de inconstitucional.

Por esa razón, nosotros no acompañamos el artículo 11. Solamente queríamos señalar eso, porque nos parece sinceramente un artículo abusivo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

**Sr. Presidente.** – Senadora Negre.

**Sra. Negre de Alonso.** – Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que en 2005 presenté

un proyecto que también vino consensuado por el Colegio de Abogados, por FACA, etcétera. Después, no logramos la media sanción. Posteriormente, la senadora Cappellini, cuando fue presidenta de la Comisión de Legislación General en 2012, puso a consideración otro proyecto mío que también había sido consensuado.

En este caso, acompañamos gustosos el proyecto que han presentado los colegas y que ha tenido todo el apoyo de la abogacía argentina, porque no solamente alcanza los honorarios de los profesionales nacionales sino también de los federales. Es decir, es un proyecto que involucra a todos aquellos que están matriculados en el fuero federal.

Voy a pedir permiso para insertar, porque me gustaría profundizar en varios temas.

Simplemente, lo que quiero es contestar al senador Naidenoff que, por ejemplo, la ley de regulación de honorarios de mi provincia establece que no se pueden levantar los embargos hasta que no se desinteresa al profesional, porque, si no, queda totalmente desguarnecido. No se puede pedir la regulación de honorarios hasta que termine y ahí le levantan todas las medidas cautelares que son las que garantiza.

En ese sentido, voy a apoyar el proyecto como está. Acompaño todas las modificaciones que propone el senador Urtubey, menos la de los síndicos, sobre lo cual sostengo lo que venía en la propuesta original, que es lo que quiere la abogacía argentina: que los abogados nos encontramos absolutamente habilitados para ser síndicos. Es decir, que no sea solamente el patrocinio obligatorio, sino, además, que puedan ser síndicos con el asesoramiento de los contadores; que sea indistinta la figura, como en algún momento estuvo vigente en la República Argentina.

También, quiero agradecer especialmente al presidente de la comisión, senador Urtubey, quien ha ido recogiendo todas las inquietudes y sugerencias de modificaciones y las ha ido consensuando con todos los sectores a los que se ha consultado, porque han venido los sectores de los abogados y de los contadores, representantes del Poder Ejecutivo, etcétera. Pido autorización para insertar.

**Sr. Pichetto.** – Hagamos una sola votación, presidente.

**Sr. Presidente.** – Lamentablemente, no hay quórum.

–Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente.** – Vamos a hacer una sola votación en general y en particular, más las inserciones, salvo los artículos 11 y 64. Después, votaremos esos dos.

Tiene la palabra el senador Cimadevilla.

**Sr. Cimadevilla.** – Comparto lo señalado por la senadora Negre de Alonso en cuanto a que los abogados pueden ser síndicos.

**Sr. Presidente.** – ¿Entonces usted apoya lo que dice la senadora?

**Sr. Cimadevilla.** – Exactamente. Es un absurdo decir que no pueden ser síndicos. Siempre es un juez el que aprueba.

**Sr. Presidente.** – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Resultan 43 votos afirmativos. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – Se va a votar en particular el artículo 11.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Resultan 33 votos afirmativos, 10 negativos.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>2</sup>

**Sr. Presidente.** – Queda aprobado el artículo 11.

Ahora se va a votar el artículo 64.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Resultan 40 votos afirmativos, 3 negativos.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>3</sup>

1 Ver el Apéndice,

2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.

**Sr. Presidente.** – Queda aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.

### 13

#### DÍA DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. (O.D. N° 750/15)

**Sr. Presidente.** – Vamos a tratar el día de la integración latinoamericana.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: pido que no se levanten porque hay un conjunto de leyes importantes.

**Sr. Presidente.** – Hay acordados sobre tablas.

**Sr. Pichetto.** – Tenemos el tema de la prescripción penal para los violadores; una reforma de la Cámara de Diputados, un proyecto muy importante, que le voy a pedir que lo ponga a consideración.

**Sr. Presidente.** – Tenemos el Orden del Día N° 750, que podemos votar mediante una sola votación en general y en particular: el Día de la Integración Latinoamericana.

Senadora Pilatti.

**Sra. Pilatti Vergara.** – Respecto del proyecto de ley para instaurar el 5 de noviembre como el Día de la Integración Latinoamericana, es un proyecto que tiene dictamen de comisión y que quiero que se sume al homenaje a Néstor Kirchner, ya que estamos tan cercanos a la fecha de su fallecimiento. Este año se cumplen diez años de aquella consigna, de aquel hito histórico en nuestra política regional, cuando el presidente Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Chávez en Mar del Plata le dijeron no al ALCA, con todo lo que eso significa y a un día de estar conmemorando la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, quiero sumar este proyecto de ley como homenaje a su memoria.

**Sr. Presidente.** – Senadora Morandini: tiene la palabra.

**Sra. Morandini.** – Quiero agradecerles el tratamiento que hemos acordado sobre tablas de un proyecto de presupuestos mínimos...

**Sr. Presidente.** – Primero vamos a poner en votación este tema y después viene el otro conjunto. Gracias, senadora.

En una sola votación, en general y en particular el Orden del Día N° 750, Día de la Integración Latinoamericana. Pueden votar. También votamos las autorizaciones para insertar en el Diario de Sesiones.



Proyecto: ORDEN DEL DÍA 753 CON MODIFICACIONES

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2

LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: BOUDOU, Amado

Honorable  
**SENADO**  
de la Nación Argentina

Fecha: 28/10/2015 22:08:53

Acta: 8

Presentes: 43 Ausentes: 29 AMN: 22

Afirmativos: 43  
Negativos: 0  
Abstenciones: 0  
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
Abal Medina, Juan Manuel	SI	14	Latorre, Roxana Itati	AUSENTE	
Aguilar, Eduardo Alberto	SI	54	Leguizamón, María Laura	SI	37
Aguirre, Hilda Celia	SI	2	Linares, Jaime	AUSENTE	
Artaza, Eugenio Justiniano	SI	42	Luna, Mirtha M. T.	SI	27
Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	Mansilla, Sergio Francisco	AUSENTE	
Basualdo, Roberto Gustavo	AUSENTE		Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
Bermejo, Rolando Adolfo	SI	17	Martínez, Alfredo Anselmo	SI	8
Bertone, Rosana Andrea	SI	52	Mayais, José Miguel Ángel	AUSENTE	
Bias, Ines I.	SI	28	Meabe, Josefina Angelica	AUSENTE	
Borello, María	SI	41	Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
Boyadjian, Miriam Ruth	SI	67	Micheli, María Gabriela	AUSENTE	
Cabral, Salvador	AUSENTE		Monllau, Blanca María del Valle	AUSENTE	
Castillo, Oscar Anibal	AUSENTE		Montenegro, Gerardo Antenor	SI	64
Catalán Magni, Julio César	SI	53	Montero, Laura Gisela	AUSENTE	
Cimadevilla, Mario Jorge	SI	20	Morales, Gerardo Rubén	AUSENTE	
Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		Morandini, Norma Elena	SI	44
De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		Negre de Alonso, Liliana Teresita	SI	39
De la Rosa, María G.	SI	18	Odarda, María Magdalena	SI	48
Di Perna, Graciela Agustina	AUSENTE		Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI	26	Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
Fellner, Liliana Beatriz	SI	31	Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	6
Fiore Viñuales, María Cristina del Valle	SI	63	Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
Fuentes, Marcelo Jorge	SI	16	Piliati Vergara, María Inés Patricia	SI	62
García Larraburu, Silvina Marcela	SI	51	Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
Giménez, Sandra D.	SI	57	Riofrío, Marina Raquel	SI	33
Giustiniani, Rubén Héctor	AUSENTE		Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	Rojkes de Alperovich, Beatriz Liliana	AUSENTE	
González, Pablo G.	SI	12	Roldán, José María	SI	66
Guastavino, Pedro Guillermo Ángel	SI	32	Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
Guinle, Marcelo Alejandro Horacio	AUSENTE		Rozas, Ángel	SI	21
Higonet, María de Los Angeles	AUSENTE		Santilli, Diego César	AUSENTE	
Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	Sanz, Ernesto Ricardo	SI	23
Iturrez de Cappellini, Ada Rosa del Valle	SI	30	Solanas, Fernando Ezequiel	AUSENTE	
Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	Verna, Carlos Alberto	AUSENTE	
Labado, María Ester	SI	11	Zamora, Gerardo	SI	29

Observaciones: Votación en general y particular - excepto artículos 11º y 64º.

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

*Amalia*  
ROBERTO CARLOS ABRAHAM  
Honorable Senado de la Nación  
Prosecretaría Parlamentaria  
Director



*Goran*  
LUIS GUSTAVO BORSANI  
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN

Proyecto: ORDEN DEL DÍA 753 CON MODIFICACIONES

Descripción:

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2

LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: BOUDOU, Amado

Presentes: 43 Ausentes: 29 AMN: 22

Honorable  
**SENADO**  
de la Nación Argentina

Fecha: 28/10/2015 22:09:40

Acta: 9

Afirmativos: 33  
Negativos: 10  
Abstenciones: 0  
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
Abal Medina, Juan Manuel	SI	14	Latorre, Roxana Itati	AUSENTE	
Aguilar, Eduardo Alberto	SI	54	Leguizamón, María Laura	SI	37
Aguirre, Hilda Clelia	SI	2	Linares, Jaime	AUSENTE	
Artaza, Eugenio Justiniano	NO	42	Luna, Mirtha M. T.	SI	27
Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	Mansilla, Sergio Francisco	AUSENTE	
Basualdo, Roberto Gustavo	AUSENTE		Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
Bermejo, Rolando Adolfo	SI	17	Marínez, Alfredo Anselmo	NO	8
Bertone, Rosana Andrea	SI	52	Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
Bias, Ines I.	SI	28	Meabe, Josefina Angelica	AUSENTE	
Borello, María	NO	41	Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
Boyardjian, Miriam Ruth	SI	67	Michetti, Marta Gabriela	AUSENTE	
Cabral, Salvador	AUSENTE		Monlau, Blanca María del Valle	AUSENTE	
Castillo, Oscar Anibal	AUSENTE		Montenegro, Gerardo Antenor	SI	64
Catalán Magni, Julio César	SI	53	Montero, Laura Gisela	AUSENTE	
Cimadevilla, Mario Jorge	NO	20	Morales, Gerardo Rubén	AUSENTE	
Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		Morandini, Norma Elena	NO	44
De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		Negre de Alonso, Liliana Teresita	SI	39
De la Rosa, María G.	SI	18	Odarda, María Magdalena	NO	48
Di Perna, Graciela Agustina	AUSENTE		Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
Elias de Perez, Silvia Beatriz	NO	26	Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
Fellner, Liliana Beatriz	SI	31	Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	NO	6
Fiore Viñuales, María Cristina del Valle	SI	63	Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
Fuentes, Marcelo Jorge	SI	16	Pilatti Vergara, María Inés Patricia	SI	62
García Larraburu, Silvina Marcela	SI	51	Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
Giménez, Sandra D.	SI	57	Riofrio, Marina Raquel	SI	33
Giustiniani, Rubén Héctor	AUSENTE		Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	Rojkes de Alperovich, Beatriz Liliana	AUSENTE	
González, Pablo G.	SI	12	Roldán, José María	SI	66
Guastavino, Pedro Guillermo Ángel	SI	32	Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
Guinle, Marcelo Alejandro Horacio	AUSENTE		Rozas, Ángel	NO	21
Higonet, María de Los Angeles	AUSENTE		Santilli, Diego César	AUSENTE	
Irazábal, Juan Manuel	SI	36	Sanz, Ernesto Ricardo	NO	23
Iturrez de Cappellini, Ada Rosa del Valle	SI	30	Solanas, Fernando Ezequiel	AUSENTE	
Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	Verna, Carlos Alberto	AUSENTE	
Labado, María Ester	SI	11	Zamora, Gerardo	SI	29

Observaciones: Votación en particular - artículo 11º.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Abraham*  
ROBERTO CARLOS ABRAHAM  
Honorable Senado de la Nación  
Prosecretaría Parlamentaria  
Subdirector



*Luis Gustavo Borsani*  
LUIS GUSTAVO BORSANI  
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN

Proyecto: ORDEN DEL DIA 753 CON MODIFICACIONES

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2

Miembros del cuerpo: 72

Presidente: BOUDOU, Amado

LEGISLADORES PRESENTES

Votación: 28/10/2015

Honorables  
**SENADO**  
de la Nación Argentina

Fecha: 28/10/2015 22:10:23

Acta : 10

Afirmativos: 40  
Negativos: 3  
Abstenciones: 0  
Resultado: AFIRMATIVA

Presentes: 43 Ausentes: 29 AMN: 22

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
Abal Medina, Juan Manuel	SI	14	Latorre, Roxana Itati	AUSENTE	
Aguilar, Eduardo Alberto	SI	54	Leguizamón, María Laura	SI	37
Aguirre, Hilda Celia	SI	2	Linares, Jaime	AUSENTE	
Artaza, Eugenio Justiniano	SI	42	Luna, Mirtha M. T.	SI	27
Barriónuevo, Walter Basilio	SI	4	Mansilla, Sergio Francisco	AUSENTE	
Basualdo, Roberto Gustavo	AUSENTE		Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
Bermejo, Rolando Adolfo	SI	17	Martínez, Alfredo Anselmo	SI	8
Bertone, Rosana Andrea	SI	52	Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
Bias, Ines I.	SI	28	Meabes, Josefina Angelica	AUSENTE	
Borello, Marta	NO	41	Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
Boyardjian, Miriam Ruth	SI	67	Michetti, Marta Gabriela	AUSENTE	
Cabral, Salvador	AUSENTE		Monlaán, Blanca María del Valle	AUSENTE	
Castillo, Oscar Anibal	AUSENTE		Montenegro, Gerardo Antenor	SI	64
Catalán Magni, Julio César	SI	53	Montero, Laura Gisela	AUSENTE	
Cimadevilla, Mario Jorge	NO	20	Morales, Gerardo Rubén	AUSENTE	
Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		Morandini, Norma Elena	SI	44
De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		Negre de Alonso, Liliana Teresita	NO	39
De la Rosa, María G.	SI	18	Odarda, María Magdalena	SI	48
Di Perna, Graciela Agustina	AUSENTE		Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI	26	Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
Fellner, Liliana Beatriz	SI	31	Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	6
Fiore Viñuales, María Cristina del Valle	SI	63	Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
Fuentes, Marcelo Jorge	SI	16	Pilatti Vergara, María Inés Patricia	SI	62
García Larraburu, Silvina Marcela	SI	51	Reulemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
Giménez, Sandra D.	SI	57	Riofrio, Marina Raquel	SI	33
Giustiniani, Rubén Héctor	AUSENTE		Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	Rojkes de Alperovich, Beatriz Liliana	AUSENTE	
González, Pablo G.	SI	12	Roldán, José María	SI	66
Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	32	Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
Guinle, Marcelo Alejandro Horacio	AUSENTE		Rozas, Ángel	SI	21
Higonet, María de Los Angeles	AUSENTE		Santilli, Diego César	AUSENTE	
Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	Sanz, Ernesto Ricardo	SI	23
Iturrez de Cappellini, Ada Rosa del Valle	SI	30	Solanas, Fernando Ezequiel	AUSENTE	
Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		Trubey, Rodolfo Julio	SI	5
Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	Verna, Carlos Alberto	AUSENTE	
Labado, María Ester	SI	11	Zamora, Gerardo	SI	29

Observaciones: Votación en particular - artículo 64º.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Abraham*  
ROBERTO CARLOS ABRAHAM  
Honorable Senado de la Nación  
Prosecretaría Parlamentaria  
Director



*Borsani*  
LUIS GUSTAVO BORSANI  
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO  
H. SENADO DE LA NACIÓN



ingresan a las arcas del estado provincial, se halla que sólo vuelve por esta vía entre 30 y 35 por ciento del total de lo que recauda la Nación en nuestra provincia.

He escuchado a la senadora Negre de Alonso, y confirma de alguna manera lo que padecemos todas las provincias: no llega al 27 por ciento –26,84 por ciento– de los recursos totales del presupuesto los que son destinados a las provincias.

De esta manera, señor presidente, no le hacemos bien a nuestro pueblo, ni a nuestro país; todavía no sabemos quién será nuestro próximo presidente, no conocemos cuál será el camino y horizonte de la nueva administración; aunque ya le dejamos establecido vía presupuestaria indicadores –crecimiento, inflación, dólar, saldo comercial, entre otros– que generan mis reservas y mi absoluta convicción de que le será muy difícil desenvolverse con dichas premisas.

Por las razones expuestas, no voy acompañar este presupuesto. Mi voto será negativo.

24

#### SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA NEGRE DE ALONSO

##### **Regulación de honorarios de abogados (O.D. N° 753/15)**

Señor presidente:

Creo necesario, para subrayar la trascendencia de la sanción que propiciamos, hacer algo de historia. Esa recorrida habrá de poner luz sobre muchas de las razones que justifican aprobar el proyecto que hemos tratado en las comisiones.

Durante el gobierno del general Edelmiro Farrell, mediante el decreto ley 30.439/44 se dicta la primera ley de aranceles para abogados y procuradores. Este decreto ley fue convalidado por las leyes 12.997 y 14.170.

La Asociación de Abogados de Buenos Aires entrega al Ministerio de Justicia un proyecto de ley elaborado por una comisión integrada por doctores Antonio Texidor, Julio César Imondi y José Carlos Neira, todos ellos prestigiosos abogados.

En el año 1978, el Ministerio de Justicia elevó al presidente de la República –que había por entonces asumido las funciones legislativas– un proyecto de ley que fue aprobado como ley 21.839. Esta ley difería en muchos aspectos del proyecto sobre el que se venía trabajando y que oportunamente se elevara a la Comisión de Asesoramiento Legislativo –CAL–.

Frente a esta ley, la Asociación de Abogados de Buenos Aires adopta una actitud sumamente crítica aduciendo que la nueva ley había empeorado y no mejorado la situación reinante. En este sentido los doctores Julio César Imondi y José Carlos Neira publican un artículo en la revista de la AABA en diciembre de 1978.

Luego de la ley 23.187, mediante la cual se creó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,

en 1986, durante la presidencia del doctor Alberto Antonio Spota se encomendó a una nueva comisión la confección de un proyecto de nueva ley de arancel.

Esta comisión, integrada por los destacados juristas Bautista Kuyumdjian, Juan Miguel Richards, Carlos Ernesto Ure y José Carlos Neira, entregó un trabajo al cual no se le dio tratamiento.

Contemporáneamente, el entonces ministro de Justicia, doctor César Arias, designó una comisión integrada por varios funcionarios del organismo y por representantes de las diversas entidades, tales como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Procuradores.

La representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la asumió al comienzo el doctor Hernán Agustoni, quien aprovechó la existencia del proyecto elaborado por los doctores Kuyumdjian, Ure y Neira y propuso a la comisión trabajar sobre la base de éste y no de la ley 21.839, lo que se acordó unánimemente. Al poco tiempo, durante la presidencia del doctor Podetti, el doctor Neira sustituyó al doctor Agustoni.

La comisión del ministerio trabajó activa y eficazmente, y, luego de tratar aproximadamente la mitad del proyecto, se suspendió su labor sin concluir la tarea.

Cabe resaltar que en el año 1991 el entonces presidente Carlos Saúl Menen y su ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, a través del decreto 2.284, dejaron sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, comisiones o cualquier otra forma de retribución de servicios profesionales, no comprendidos en la legislación laboral o en convenios colectivos de trabajo, en cualquier clase de actividad, incluyendo los mercados de activos financieros u otros títulos, establecidos, aprobados u homologados por leyes, decretos o resoluciones.

Dicha situación, que empeoró la de los abogados en cuanto a la protección de sus honorarios y su relación con el orden público, en forma alguna mejoró con la ley de honorarios 24.432 de 1995, sino todo lo contrario.

Tiempo después, la Cámara de Diputados de la Nación solicitó al Colegio Público de Abogados del Capital Federal un proyecto de nueva ley de arancel. Nuevamente se encomendó al doctor Neira participar en la Comisión del Ministerio de Justicia. El resultado de la labor de esta comisión se elevó al Congreso de la Nación.

Durante la presidencia del doctor Bacqué se volvió a abordar el tema. Nuevamente fue creada una comisión al efecto. Dicha comisión se encontraba conformada los doctores Ure, Valdés Naveiro, Finkelberg y Neira. Se trabajó sobre el antecedente del Colegio, culminado con la redacción de un nuevo texto.

Transcurrió toda la presidencia del doctor Aníbal Atilio Alterini sin que el proyecto tuviera tratamiento en el Consejo Directivo. Ya durante la presidencia del doctor Germano, en 2002, dicho Consejo dio aprobación, por unanimidad, al texto proyectado.

Sin embargo, las comunes intenciones de sancionar un nuevo régimen no alcanzaron y pasaron más años en el marco de la ley 21.839 y posteriormente también en el marco de la ley 24.432.

Esta senadora tampoco logró que el Parlamento aprobara su proyecto integral, muy similar al que se ha presentado ahora, habiendo perdido estado parlamentario.

Ello a pesar de que dicho proyecto fue profundamente debatido y contó con el aval de la gran mayoría de los colegios de abogados y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados –FACA–.

En definitiva, muchos años ansiando modificar una regulación que clamaba por su reemplazo.

Y en los clamores no estaba ajeno algo que surge de la breve historia legislativa que acabamos de hacer. Ella evidencia que el régimen de retribución del trabajo de los abogados, como muchas otras instituciones, está regido por una ley dictada por el proceso militar que se apropió de las instituciones democráticas. Más aún, antes de la vigencia de la actual ley, la materia estaba reglada por otra que también había sido dictada por otro proceso militar. Esta lamentable patología de nuestro ordenamiento jurídico, que se reproduce en muchas otras instituciones, imponía una revisión por los representantes del pueblo de la Nación.

Y si en esta ocasión, como parece, el proyecto se sanciona, será la primera vez que el trabajo de los abogados estará regido por una ley sancionada democráticamente. Lo cual no es un mero aditamento formal, sino una condición que asegura que el dispositivo legal es el fruto de la voluntad del pueblo de la Nación, expresada a través de sus representantes. Máxime en este caso, que no ha habido cortapisas para receptar planteos de diversos orígenes y alineaciones políticas.

El honorario carga con sí una tradición histórica que, como siempre, se remonta a Roma y que lo vinculaba a una de las actividades más elevadas en la estima social, que fueron siempre concebidas como prestaciones esencialmente gratuitas. De allí que no era posible mensurarlo sino estimarlo en razón de esa elevada consideración.

Bastardeando esa prosapia, la ley vigente y algunas modificaciones posteriores convirtieron al honorario en un costo *negocial*, de igual índole que cualquier otro que integrase la ecuación económica de cualquier relación de esa naturaleza. Esta reducción, paradójicamente, estaba acompañada de un discurso que enaltecía la importancia de la labor, pero reducía la contraprestación concreta.

Ni aquella prosapia ni este reduccionismo economicista tienen relación con la naturaleza del honorario y,

por ende, con la materia del proyecto que votamos. En definitiva, hoy se trata de la contraprestación debida por el trabajo del abogado. Es, más concretamente, el salario del abogado y como tal debe recibir la consideración y las garantías consecuentes.

Y no estamos haciendo descender la actividad profesional desde el Olimpo romano dedicado a las artes liberales, para rebajarla al llano. Reconocerle al honorario la ínsita condición de retribución por el trabajo del abogado, significa atribuirle la dignidad propia de la actividad laboral, que es parte estructural de nuestra organización jurídica –artículo 14 bis de la Constitución Nacional–.

Pero además de este emplazamiento axiológico, ello conlleva consecuencias jurídicas concretas, que determinan que su condición alimentaria deje de ser una declamación y se plasme en dispositivos tuitivos en la regulación de la protección del honorario, de su determinación y de su cobro.

Por otra parte, considerar el honorario como el salario del abogado supone tener presente cuánto compromete el profesional en su labor. No sólo se trata de la responsabilidad concreta por su tarea –que puede aparejarle consecuencias disciplinarias, administrativas, civiles y hasta penales–, sino también de los recursos de que debe valerse para llevarla a cabo. La labor del abogado no consiste en sentarse frente a un ordenador y redactar, con mayor o menor literatura, un discurso jurídico, o bien, en propalarlo oralmente. Ese es el mero aspecto instrumental que ha sido precedido, de haber previamente montado una organización, grande o pequeña –su estudio o el estudio–, que le posibilite atender las demandas, ansiedades e inquietudes de su cliente, contenerlas, estructurar una estrategia para alcanzar los mejores objetivos y llevarlas a cabo. Todo eso, por supuesto, tiene costos que trascienden el momento final: los escritos del expediente o las alegaciones de la oralidad. En definitiva, esa es la fuerza de trabajo que el abogado pone en funcionamiento cuando concreta su labor en los procesos judiciales, donde se determinará su retribución. Y son los que deben tenerse en cuenta cuando se realiza esa tarea jurisdiccional.

Son muchos y variados los aspectos destacables del proyecto que acompaño con mi voto, como la determinación del orden público del proyecto y el carácter alimentario de los honorarios, fijando un límite de embargabilidad de hasta 20 por ciento del monto que supere el salario mínimo vital y móvil salvo deudas alimentarias y de litis expensas; la ampliación y detalle de la regulación de los pactos de cuota litis, estableciendo inclusive que la institución a cargo del gobierno de la matrícula de abogados y procuradores registrará a pedido de parte los contratos de honorarios y pactos de cuota litis; la implementación de la unidad de medida arancelaria –UMA–, que equivale al 1,5 por ciento de la remuneración total asignada al cargo de juez federal de primera instancia incluida la bonificación equivalente a seis años de antigüedad, como honorario



mínimo; la consideración de los intereses sobre monto de condena como base regulatoria; la acción por cobro de honorarios regulados judicialmente tramitará por la vía de ejecución de sentencia y no abonará tasa de justicia ni estará sujeta a ningún tipo de contribución; el establecimiento de patrocinio letrado obligatorio para los síndicos en los concursos y quiebras.

En fin, numerosas reglas que subsanan arbitrariedades que la profesión jurídica lleva padeciendo los años de la historia que antes recorrió.

Entre todas ellas quiero detenerme, particularmente en algunas novedades.

El proyecto impone enfáticamente la necesidad de fundamentar las decisiones regulatorias. Que el proyecto contenga una norma en tal sentido, resalta los años de inequidad que han padecido los profesionales a la hora de ser objetos de las resoluciones que determinaban sus emolumentos.

Y deseo destacarlo, a los efectos de que cuando los jueces y los interpretes acudan a determinar el sentido de las normas de esta regulación, les quede claro que fundamentar una decisión que valora económicamente el trabajo de un abogado, no es recitar los aspectos a tener en cuenta sino justificar porque corresponde retribuir cada uno de ellos.

Parece de Perogrullo, pero infinidad de decisiones obligan a la aclaración. Fundamentar un honorario no es decidir un monto sosteniendo que el mismo valora “la extensión, calidad, complejidad, etcétera” de la labor. Decidir de esa manera es resolver arbitrariamente, guardando en el ánimo del Juzgador de que “extensión” se trata, cual es “la calidad” que se estima, cual el grado de “complejidad”.

El correlato de esa manera jurisdiccional de proceder era someter al profesional a una violación de su garantía de defensa, ya que cualquier cuestionamiento

a la valoración, no atendía a las razones del decisorio —que no habían sido dadas— sino a la propia estimación de su trabajo por el profesional. En definitiva, algo absolutamente contrario a la técnica impugnativa de los recursos.

Por tal razón, algo tan elemental en el siglo XXI como que una decisión debe estar fundada, resulta una conquista. De allí que desee enfatizar esta inteligencia, para que la norma —en el caso en que termine sancionada— no resulte nuevamente bastardeada por una jurisdicción habitualmente reticente a lo hora de valorar el trabajo de quienes, en definitiva, son sus colegas —condición que usualmente se olvida en esa instancia—.

Asimismo, es dable mencionar que esta senadora, en aras de acompañar el proyecto, ha declinado insistir en algunas modificaciones. Así oportunamente propicié, por ejemplo, que, a los fines de incrementar la protección del honorario, el juez se encuentre obligado a retener sobre las sumas depositadas en el expediente el monto que corresponda en virtud del pacto de cuota litis homologado judicialmente.

También propuse facultar a las instituciones a cargo del gobierno de la matrícula de abogados y procuradores para perseguir el cobro de honorarios profesionales pendientes en caso de inacción por parte del interesado, como también la aprobación de redacción originaria del proyecto en cuanto a la facultad de los abogados para ser síndicos en procesos concursales y quiebras. Y en este último aspecto reivindicó el origen jurídico del cargo y no me parece veraz la historia que pretende atribuir la incumbencia como una exclusividad histórica de la profesión contable.

Pero esas modificaciones quedaran para una mejor oportunidad, con el fin de que mis colegas comiencen, cuanto antes, a contar con una norma que repare los perjuicios que las iniquidades de la legislación vigente les hacen padecer.